

La reunión de Monterrey: acuerdo con desacuerdo

1. Disputa de agendas: ¿de qué hablamos?

Hemos cambiado de calendario, pero los problemas del nuevo milenio invaden el año 2004. El 11 de enero se vuelven a encontrar, en Monterrey, los mismos delegados y jefes de Estado, congregados en Miami, en noviembre de 2003. Incluso asistieron algunos de los participantes en la cumbre de Naciones Unidas, tenuta en la misma ciudad de Monterrey, en marzo de 2002, dedicada al “financiamiento del desarrollo y el alivio de la pobreza”. Los congregados en Monterrey conocen el complejo borrador del Foro Social Mundial de Bombay: “la pobreza, los intocables (*dalits*), la oposición al neoliberalismo y a la guerra de Irak”. Algunos presagiaban que Irak volvería a ser uno de los puntos calientes del Foro Económico Mundial de Davos, tal como lo había sido en 2003, porque la economía no puede crecer si a la par crece la inseguridad. La jornada mundial de la paz de Juan Pablo II acababa de decir que la paz no puede reinar en un mundo inseguro.

En este escenario continental y mundial no era fácil ponerse de acuerdo sobre los puntos de la agenda, tanto más que no todos los mandatarios tenían la misma visión y comprensión de los problemas mundiales y, en consecuencia, de las soluciones y acuerdos por negociar. Estaba reciente la confrontación surgida en Miami, en noviembre de 2003, donde los delegados de Estados Unidos y Brasil convinieron en presentar un acuerdo de un ALCA “*light* y flexible”, de decir, a dos velocidades, para salvar del naufragio el proyecto (ver esta

misma edición de *ECA*). El delegado estadounidense tuvo que ceder, porque varios gobiernos latinoamericanos no comulgan con las virtudes del libre comercio internacional. La misma confrontación, necesariamente, afloró, un mes después, en Monterrey. Los delegados ministeriales no lograron ponerse de acuerdo al redactar un documento borrador que pudiera ser firmado por todos los mandatarios. Tal vez el fruto mayor de esta cumbre hayan sido los puntos de desacuerdo y que el documento final “no ha satisfecho ni a una ni a otra parte, Estados Unidos y América Latina”.

El presidente Bush llegó a Monterrey con ánimo de predicar su Biblia de bolsillo: “la prioridad es la seguridad, promover la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y activar el Área del Libre Comercio de las Américas” (*El País*, 12 de enero de 2004). “Bush llega a México con dos personalidades paralelas: campeón del librecambismo liderando el ALCA, que oficialmente entrará en vigor en 2005; y baluarte contra la corrupción, a la que cree responsable de buena parte de los problemas de los países en desarrollo. América Latina pretendía una discusión sobre el triángulo conceptual que constituye el mínimo común denominador: el que tiene como vértices la democracia, la pobreza y la desigualdad” (J. Estefanía, *El País*, 19 de enero de 2004).

2. Divergencias entre Washington y el Sur

Los asuntos oficiales de esta cumbre eran “la gobernabilidad democrática, el crecimiento con equidad y el desarrollo social”, títulos sonoros, que

se traducen en amplia retórica sin compromisos concretos, tan como se ha venido haciendo en estas cumbres. Basta leer los “compromisos de la cumbre de Monterrey”, organizada por Naciones Unidas, en marzo de 2002, que terminan en un acápite: “declaraciones sin compromisos”. No se llegó a ningún acuerdo concreto para financiar el desarrollo y el alivio de la pobreza, y la lucha contra la corrupción no pasó más allá de una nutrida lista de “maestros de la corrupción”, en varios países de África y de América Latina (*Realidad*, 2002, pp. 131-154). En Monterrey no se está de acuerdo en que el “terrorismo 11 de septiembre” sea el problema número uno de la humanidad ni del continente latinoamericano, tal como aparece, una semana después, en el foro social de Bombay. Más bien, se tiene conciencia de que la lucha contra el terrorismo —luego de diez meses de experiencia— es, en sí misma, más terrorista y generadora de más terrorismo. Incluso, algunos de los participantes en el foro económico mundial de Davos han dicho que “el eje del mal son la pobreza, el sida y la desigualdad” (*Le Monde*, 26 de enero de 2004).

La divergencia radical se fundamenta en el análisis de los problemas y en sus soluciones. La democracia en América Latina es débil, así como las políticas de Estado, que generan un crecimiento económico incapaz de crear empleo. “El 44 por ciento de la población es pobre y crece el paro encubierto. Desde los años noventa, siete de cada diez nuevos puestos de trabajo son precarios y solo dos cuentan con prestaciones sociales”. No hay acuerdo, sino creciente desacuerdo respecto a la eficiencia económica y social del libre comercio y, por ello, la oposición a que el ALCA figure en la Declaración de Monterrey (*El País*, 12 de enero de 2004). Todavía está fresco el recuerdo de la cumbre de Cancún y el enfrentamiento de Estados Unidos y Brasil, en Miami.

A lo largo de esta cumbre se enfrentan dos concepciones del desarrollo. “Una, defendida por Estados Unidos, privilegia el comercio y la libre empresa. La otra, expuesta por el presidente Lula da Silva, insiste en la función social del Estado en la lucha contra la pobreza”. El presidente Lula denuncia “el modelo perverso que separa lo económico y lo social. De una vez por todas, debemos afirmar la superioridad del interés colectivo y del bien común en las Américas. Luego de los años de 1980 —los años perdidos—, la década de 1990 ha sido de desesperación”, en la lucha contra la pobreza. “Se trata de un modelo perverso que, por des-



gracia, separa lo económico de lo social, favorece la estabilidad en detrimento del crecimiento y disocia la responsabilidad y la justicia. La estabilidad económica ha vuelto la espalda a la justicia social”.

A la voz de Lula da Silva se une la crítica del presidente de Argentina, Néstor Kirchner, que reclama un capitalismo más humano. Kirchner está haciendo los mejores esfuerzos para solventar la pesada deuda externa, que heredó de gobiernos anteriores y siente que se repiten los errores del pasado, porque no recibe la suficiente ayuda de la comunidad internacional para relanzar la economía de su país. “Sufrimos las presiones y también la incomprensión y demoras de los organismos internacionales, que parecen no entender la naturaleza de nuestras necesidades. Es inaceptable que insistan en una receta (económica) que ha fracasado”. Algunos jefes de Estado han dado un giro hacia la izquierda y no están de acuerdo con la política neoliberal de Washington. “Brasil y Argentina, que no son hostiles al libre cambio, son muy críticos de la política comercial norteamericana, porque las subvenciones concedidas por Estados Unidos a su agri-

cultura impiden a productores más competitivos acceder a ese mercado. Sin embargo, en la declaración final, los países participantes en esta reunión se comprometen a hacer avanzar el proyecto del ALCA” (*Le Monde*, 14 de enero de 2004).

Varios corresponsales subrayan esta oposición al liderazgo de Estados Unidos, porque sus políticas no han servido para disminuir la pobreza. Quedó claro en esta cumbre que los gobiernos de México, Colombia y Centroamérica son más proclives a las políticas del norte que Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia. Hugo Chávez (quien, sea dicho entre paréntesis, hizo serias críticas a Bush y a su asesora Condoleezza Rice por “meter las narices en asuntos internos” de Venezuela) afirmó: “Los verdaderos factores de desestabilización en la región son la pobreza y el neoliberalismo. Reconozcamos que nos hemos metido en la vía equivocada”. Ricardo Lagos, presidente de Chile, una de las economías más prósperas, también resaltó las debilidades del modelo libre cambista, lamentando la fosa que separa a ricos y pobres, en toda la región. “Este no es el continente más pobre, pero tal vez es uno de los continentes más injustos” (*Le Monde*, 14 de enero de 2004).

3. Libertad de comercio y anticorrupción

En la Biblia de Bush, la pobreza y la desigualdad se corrigen con el libre mercado y el ataque a la corrupción. Los jefes de Estado, congregados en Monterrey, debían agregar la “cláusula de transparencia” en la declaración final: los gobiernos corruptos deben ser expulsados de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estados Unidos propone sanciones a los gobiernos corruptos, pero muchos delegados preguntan quién será el juez.

La lacra de la corrupción es tema repetido en varias cumbres latinoamericanas. En Monterrey, en marzo de 2002, se dijo: “Un tema pendiente es la forma en que se puedan repatriar recursos económicos de los países en vías de desarrollo y transferidos a bancos de los países industrializados”. Para que haya corrupción hacen falta dos y por ello se agregó: “Pero también es cierto que los países industrializados cometieron muchos errores en la ejecución de los programas de ayuda a sus ex colonias, según admiten los gobiernos donantes. El dinero fue concedido a tiranos, a funcionarios ladrones o se perdía en los vericuetos de la corrupción” (*Entorno económico mundial*, UCA Editores, 2003. pp. 246-247). En el foro social de Porto Alegre del año 2002, se denunció que la lacra de la corrup-

ción es uno de los gravámenes que pesan sobre la deuda externa y se introdujo el término de “la deuda odiosa”, una noción del derecho internacional, que existe desde 1920: “un pueblo puede rechazar el pago de una deuda de un régimen anterior, si se prueba que el gobierno la utilizó para beneficio propio” (*Ibid.*, p. 238). No son pocos los casos, pero el problema es que la corrupción no persigue a la corrupción.

Joaquín Estefanía comenta que los principios de la libertad de comercio y anticorrupción de Bush no gozan de credibilidad, “teniendo en cuenta la política que práctica”. Forzado por la Organización Mundial del Comercio, Bush levantó los aranceles a las importaciones de acero; “la política económica republicana es muy proteccionista; solo le gustan las importaciones de bienes y servicios de los demás (sobre todo si es de productos *Made in USA*), no los propios”. Esto se hace más patente en la litigada política de sus masivas subvenciones agrícolas. “Qué decir de la corrupción”. La serie de quiebras fraudulentas y las contabilidades creativas, que sirven para engañar a los inversores, no son la mejor escuela de enseñanza —aprendizaje de ética empresarial—. Al momento de celebrarse la cumbre de Monterrey, se iniciaba una investigación en la *Coca Cola* y en “algunas de las compañías a las que el gobierno ha adjudicado a dedo contratos para la reconstrucción de Irak, como la inefable *Halliburton*, antes presidida por el vicepresidente de Estados Unidos Cheney, que aparece en el centro de cualquier irregularidad y abuso que es hecho público”. Entre los mayores contribuyentes a la campaña electoral de Bush se citan las empresas *Enron*, *Merril Lynch*, *Credit Suisse First Boston*, *Golman Sachs* o *Pricewaterhouse Cooper*, bien situadas en la lista de escándalos financieros (*El País*, 19 de enero de 2004).

La propuesta del gobierno de Bush para excluir del sistema interamericano a los gobiernos corruptos no fue aceptada. La declaración menciona “las prácticas corruptas de algunas empresas nacionales y transnacionales” y los signatarios se comprometen “a no acoger a funcionarios corruptos y a cooperar para su extradición y recuperación de sus activos”. Hugo Chávez coreó esta decisión: “Nosotros sabemos dónde viven numerosos corruptos que han robado miles de millones de dólares, que tienen cuentas bancarias y propiedades en el Caribe, en América del Norte y en Europa. Los bancos de Venezuela quebraron hace diez años, pero los banqueros que huyeron nunca han quebrado”.

El embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, Jorge Valero, pregunta: "¿Quién decide quién es el corrupto? Este mecanismo puede ser utilizado como una represalia política contra determinados gobiernos". Por su parte, Hugo Chávez propone crear un fondo humanitario internacional financiado "por un porcentaje de la deuda latinoamericana". Simplemente se tomó nota de la propuesta (*Le Monde*, 14 de enero de 2004).

América Latina presenta su problema dentro del "triángulo de la democracia, la pobreza y la desigualdad". Igual que en la cumbre de Naciones Unidas de Monterrey, se esperaba ayuda financiera efectiva para combatir la pobreza y la desigualdad. El libre comercio ha demostrado no ser la medida de alivio, sino de profundización de la desigualdad. Por ello, no se incluyó el 1 de enero de 2005 como la fecha de entrada en vigor del ALCA; quedó escrito "de acuerdo al calendario adoptado para la conclusión de las negociaciones en los plazos previstos". Las referencias a la "seguridad y al terrorismo" fueron vagas. Un pequeño, pero importante com-

promiso, es reducir a la mitad los costos de la transferencia de remesas de emigrantes, las cuales rondan los 32 mil millones de dólares. Si esto se realizara, sería una de las principales ayudas financieras a sus beneficiarios.

La Declaración de Monterrey, sin compromisos concretos, en la normativa del comercio internacional y en el alivio de la deuda, suena bien para la propaganda preelectoral: "los jefes de Estado y de gobierno instan a buscar el crecimiento con equidad para asegurar la gobernabilidad de sus países". Aunque parezca contradictorio, lo más importante de esta cumbre es que se trata de "un acuerdo entre grandes desacuerdos". Al fin y al cabo, la reunión de Monterrey recoge el cúmulo de desacuerdos regionales y mundiales, acumulados en 2003, desde el foro social de Porto Alegre hasta el fracaso de Cancún. Y la riada prosigue en los foros de Bombay y Davos de 2004.

F. JAVIER IBISATE
Catedrático del Departamento
de Economía de la UCA

